

Causas del genocidio de Darfur ***Un análisis basado en el modelo de Bárbara Harff***

The Causes of the Darfur War ***An Analysis Based on Barbara Harff's Model***

André Rangel*

Recibido el 30 de junio de 2016

Aceptado el 10 de julio de 2016

RESUMEN

Este artículo analiza la campaña de contrainsurgencia llevada a cabo por el gobierno sudanés y las milicias *janjawid* durante la guerra de Darfur. La primera parte determina si dicha campaña constituyó un genocidio con base en la definición y las cuatro pautas que Bárbara Harff propone para identificarlo. La segunda sección explica la ocurrencia del genocidio de Darfur a partir de la revisión histórica y el análisis de seis precondiciones o factores identificados por Harff: la agitación política, los genocidios anteriores, la orientación ideológica de la élite gobernante, el tipo de régimen, el carácter étnico de la élite y la apertura comercial. Esta investigación busca determinar si las políticas conducidas por el gobierno sudanés y las milicias *janjawid* constituyeron genocidio o *politicidio* –asesinato masivo de grupos políticos–, para posteriormente identificar y explicar sus causas.

ABSTRACT

This paper examines the counterinsurgency campaign carried by the Sudanese government and the *Janjawid* militias during the Darfur war. The first part considers whether that campaign constituted genocide according to the definition and four guidelines set forth by Barbara Harff to identify genocide. The second section explains the Darfur genocide based both on a historical review and analysis of the six preconditions or factors identified by Harff, namely, political upheaval, previous genocides, the ideological orientation of the ruling elite, the type of regime, the ethnic character of the ruling elite, and openness to foreign trade. This research aims at establishing whether the nature of the policies of the Sudanese government and the *Janjawid* militias were genocide or *politycide* –mass murder of political groups– to identify and explain accordingly its causes.

* Maestro en Relaciones Internacionales, Universidad Nacional Autónoma de México. Analista internacional de Amnistía Internacional, Oficina Regional para las Américas (México). Sus líneas de investigación son: precondiciones sociopolíticas y psicosociales del genocidio; violencia sexual como estrategia genocida; identidades grupales y genocidio. Correo electrónico: arangelsamano@gmail.com

Palabras clave: genocidio; guerra de Darfur; **Keywords:** genocide; Darfur Conflict; Barbara Bárbara Harff. Harff.

Introducción

A partir de 2001 (Flint y De Waal, 2008: 82), en la región de Darfur, ubicada en el occidente de Sudán, se desarrolló un conflicto bélico tras la sublevación del ejército de Liberación de Sudán (SLA, por sus siglas en inglés) y del Movimiento Justicia e Igualdad (JEM, por sus siglas en inglés) como respuesta a la prolongada marginación económica, política y social impuesta por el régimen sudanés. De acuerdo con diversas fuentes, incluyendo la Corte Penal Internacional (CPI), durante esta guerra el gobierno de Sudán y las milicias *janjawid*¹ –pertenecientes, principalmente, a grupos étnicos árabes– llevaron a cabo políticas que pudieran haber constituido crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio contra los grupos étnicos africanos *fur*, *masalit* y *zaghawa*, prioritariamente.

Dado el carácter reciente del caso de Darfur, las primeras investigaciones sobre el tema estuvieron caracterizadas, en su mayoría, por un enfoque criminológico y jurídico, debido a los requerimientos más urgentes de indagación y castigo a los perpetradores. Esta posición centró gran parte de los estudios en la descripción del conflicto, la identificación de sus causas inmediatas (O’Fahey, 2006: 24), la narración de las atrocidades cometidas y la identificación de sus responsables.

En el ámbito internacional, el análisis estuvo restringido a la determinación de la responsabilidad y a la evaluación de la respuesta de ciertos actores, particularmente los encargados de prevenir y castigar el genocidio, como la Organización de las Naciones Unidas, la CPI y, en este caso, también la Unión Africana. Aunado a esto, hasta el inicio de esta investigación, las principales publicaciones de relaciones internacionales sobre este caso dieron un mayor énfasis al estudio de las reacciones de los actores internacionales ante la crisis humanitaria, ignorando su posible incidencia directa en las políticas llevadas a cabo por el gobierno de Sudán y las milicias *janjawid* durante la guerra de Darfur.

A diferencia de dichos enfoques, esta investigación busca determinar si las políticas conducidas por el gobierno sudanés y las milicias *janjawid* constituyeron genocidio o *politicidio* (asesinato masivo de grupos políticos), para posteriormente identificar y explicar sus causas.

Para analizar el caso de Darfur fue elegido un modelo teórico que –a diferencia de otros estudios que limitan la comprensión de fenómenos complejos como este, al estar basados

¹ Según O’Fahey (2006: 30), la palabra *janjawid* proviene del árabe *jann* (*jinn*), que significa espíritu o diablo, y de *jawad*, que se refiere a caballo. En algunos textos aparece traducido como “diablo a caballo” y es utilizado para referirse a las milicias integradas por grupos árabes que fueron utilizadas por el gobierno de Sudán como parte de su estrategia de contrainsurgencia durante la guerra de Darfur.

exclusivamente en el análisis de categorías propias de una sola disciplina o perspectiva teórica— integra conceptos y perspectivas teóricas de distintas disciplinas sociales. Este modelo fue propuesto por la politóloga Barbara Harff. Su importancia radica en la inclusión y la expansión del trabajo teórico y empírico previo a la comprobación de los efectos del conflicto anterior, las características de la élite, el tipo de régimen y el contexto internacional sobre la ocurrencia de un genocidio o un *politicidio*.

En principio, Harff construye una definición propia de genocidio y crea el término *politicidio*, buscando resolver las deficiencias explicativas de la definición legal —incluida en la Convención de Genocidio y en el Estatuto de Roma—. Adicionalmente, propone cuatro pautas que permiten distinguir casos de genocidio o *politicidio* de otros asesinatos en masa.

Finalmente, Harff identifica seis factores causales relacionados con la ocurrencia del genocidio o el *politicidio*: el contexto de agitación política, la existencia de genocidios anteriores, la presencia de una ideología excluyente en la élite gobernante, el dominio del Estado por parte de un régimen autocrático, la captura del gobierno por una minoría étnica y la baja apertura comercial internacional del país.

Determinación del genocidio de Darfur

Para Harff (2003: 58), un genocidio o un *politicidio* es la promoción, ejecución o consentimiento implícito de políticas sostenidas por élites gobernantes o sus agentes —o, en el caso de guerra civil, cualquiera de las autoridades contendientes—, que estén previstas para destruir, total o parcialmente, a un grupo étnico comunitario, político o politizado.

La principal distinción entre ambos conceptos es que durante los genocidios los grupos atacados son definidos por los perpetradores en términos de sus características comunitarias, mientras en los *politicidios*, las víctimas son definidas con base en su oposición política al régimen y a los grupos dominantes.

Harff (2003: 59) afirma que en los genocidios y *politicidios* los asesinatos nunca son accidentales ni actos llevados a cabo por individuos, sino bajo la dirección explícita o tácita de autoridades estatales —o aquellos que reclaman la autoridad estatal—. Con la finalidad de distinguir los casos de genocidio y *politicidio* de otros tipos de asesinatos que ocurren durante conflictos civiles, son propuestas las siguientes pautas.

Establecer la complicidad y la intención de las autoridades

Existe evidencia del involucramiento del gobierno de Sudán durante la guerra de Darfur en:

1. El reclutamiento, entrenamiento, financiamiento, equipamiento y comando de las milicias *janjawid*.

2. La organización y ejecución de bombardeos y ataques terrestres sobre aldeas de grupos *fur*, *masalit* y *zaghawa*, principalmente.
3. La organización y ejecución de una campaña de violencia sexual, que incluyó violaciones, embarazos forzados, mutilaciones y raptos, dirigida –aunque no de forma exclusiva– a las niñas y mujeres pertenecientes a grupos *fur*, *masalit* y *zaghawa*, principalmente.
4. La difusión de una ideología racista enfocada a la deshumanización de los grupos *fur*, *masalit* y *zaghawa*, principalmente, señalados colectivamente como “*zurga*”, que significa negros.
5. La organización y ejecución del robo y la destrucción de la propiedad y los medios de subsistencia de grupos *fur*, *masalit* y *zaghawa*, principalmente.
6. La imposición de obstáculos burocráticos para retrasar y bloquear las operaciones de ayuda humanitaria dirigidas a la población de los campos de personas internamente desplazadas, quienes pertenecen a los grupos *fur*, *masalit* y *zaghawa*, principalmente.
7. La implementación de una política de censura, hostigamiento y detenciones arbitrarias a periodistas, funcionarios públicos y personal de organizaciones de la sociedad civil, presuntamente involucrados en la recolección y difusión de información relacionada con las atrocidades masivas cometidas durante la guerra de Darfur.
8. La autorización del asentamiento de grupos árabes en los territorios poseídos por grupos *fur*, *masalit* y *zaghawa*, principalmente, antes de su desplazamiento forzado masivo. Dado que existe evidencia de que las milicias *janjawid* fueron reclutadas, entrenadas, financiadas, equipadas y comandadas por el gobierno de Sudán, son consideradas sus agentes. De acuerdo con esta idea, existe evidencia de su participación en los puntos 2, 3, 4 y 5, además de:
9. La ejecución de una campaña de hostigamiento, que incluía asesinatos, violaciones, raptos, tortura y mutilaciones a la población de los campos de personas desplazadas internamente.

Debido a que estos nueve puntos demuestran la existencia de un conjunto de acciones persistentes en el tiempo y coherentes en su modo de ejecución, autorizadas y llevadas a cabo por el gobierno de Sudán y las milicias *janjawid*, que provocó la muerte de aproximadamente doscientas mil y el desplazamiento de más de dos millones de personas pertenecientes a los grupos *fur*, *masalit* y *zaghawa*, principalmente, puede afirmarse que existe evidencia, a primera vista, de la responsabilidad de las autoridades.

La intención

De acuerdo con Harff, para que el genocidio pueda ser distinguido de fenómenos relacionados es importante buscar evidencia que permita inferir la intención. Después de analizar sus cuatro hipótesis, puede afirmarse que:

1. Los perpetradores potenciales son agentes del Estado o autoridades rivales; por ejemplo, unidades militares o policíacas, o milicias autorizadas por el Estado o por líderes revolucionarios. Los principales perpetradores de las atrocidades masivas cometidas durante la guerra de Darfur fueron las tropas del ejército de Sudán, una unidad militar estatal, y las milicias *janjawid*, una milicia autorizada por el Estado.
2. Las élites o grupos vinculados a ellas frecuentemente utilizan propaganda de odio y atacan a los opositores étnicos y políticos del Estado. Las tropas del ejército de Sudán y las milicias *janjawid* frecuentemente utilizaron propaganda de odio, fundamentada en una ideología racista, y atacaron a los grupos *fur*, *masalit*, *zaghawa*, principalmente, considerados como opositores étnicos y políticos del gobierno de Sudán.
3. La represión gubernamental en respuesta a actividades de oposición es enormemente desproporcionada con respecto a los actos de oposición. Los actos de represión llevados a cabo por el gobierno de Sudán y las milicias *janjawid*, que incluyeron actividades de hostigamiento, censura, detenciones arbitrarias, tortura, destrucción de aldeas, violaciones masivas, el asesinato de aproximadamente doscientas mil y el desplazamiento de alrededor de dos millones de personas, no fueron únicamente desproporcionados sino que fueron, en su mayoría, dirigidos contra miembros de la población civil que no estuvieron directamente involucrados en las actividades llevadas a cabo por los opositores políticos y los grupos rebeldes armados.
4. Las autoridades y las fuerzas de seguridad ignoran asesinatos aislados y abuso a miembros de grupos étnicos y políticos.

El gobierno de Sudán y las tropas de su ejército nunca intervinieron para prevenir las principales atrocidades masivas cometidas, ni castigar a sus perpetradores durante la guerra de Darfur, a pesar de la existencia de varias órdenes de aprensión emitidas por la CPI en relación con el caso.

Dada la existencia de evidencia que comprueba estas cuatro hipótesis, puede inferirse que el gobierno de Sudán tuvo la intención de destruir total o parcialmente a los grupos *fur*, *masalit* y *zaghawa* de Darfur, principalmente.

La identidad de las víctimas

Harff afirma que las víctimas deben pertenecer a un grupo étnico, religioso o político identificable, ya sea una colectividad autodefinida o una autoritariamente definida como tal. En primer lugar, las víctimas de la campaña de contrainsurgencia llevada a cabo por el gobierno de Sudán y las milicias *janjawid* pertenecieron a los grupos étnicos *fur*, *masalit* y *zaghawa*, principalmente, englobados en la categoría más general de grupos africanos.

A su vez, estos grupos étnicos fueron definidos colectivamente como “*zurga*”, o negros, por los perpetradores, lo cual, a través del señalamiento y el agrupamiento arbitrario, permitió la focalización de los asesinatos, las violaciones, el desplazamiento y la destrucción de estos grupos (Hagan y Rymond-Richmond, 2009: *xxi*).

Por lo tanto, las víctimas pertenecieron a grupos étnicos identificables y, a su vez, a una categoría racial impuesta por los perpetradores.

La amenaza a la supervivencia del grupo

Los actos llevados a cabo por el gobierno de Sudán y las milicias *janjawid* en contra de los grupos *fur*, *masalit* y *zaghawa*, principalmente, tuvieron las siguientes consecuencias directas:

1. Los bombardeos y ataques terrestres en las aldeas provocaron la muerte de decenas de miles y el desplazamiento de más de dos millones de personas.
2. La campaña de violencia sexual dirigida fundamentalmente, aunque no de forma exclusiva, a las niñas y mujeres, causó la muerte, el daño físico grave, los embarazos forzados y la disrupción de las relaciones familiares y sociales de las víctimas.
3. El robo y la destrucción de la propiedad y los medios de subsistencia de las víctimas impidieron su supervivencia y la reproducción de sus modos de vida.
4. La imposición de obstáculos burocráticos para retrasar y bloquear las operaciones de ayuda humanitaria, dirigidas a la población de los campos de personas internamente desplazadas, produjo hambruna y epidemias que afectaron a las víctimas de los tres puntos anteriores.
5. La autorización del asentamiento de grupos árabes en los territorios poseídos por grupos africanos, antes de su desplazamiento forzado masivo, impidió el retorno de las víctimas a sus lugares de residencia.
6. La ejecución de una campaña de hostigamiento, que incluía asesinatos, violaciones, raptos y mutilaciones, sobre la población de los campos de personas desplazadas internamente causó muerte, lesión física grave e impidió la supervivencia de las víctimas.

Debido a que los efectos mencionados anteriormente impidieron la continuación de la vida grupal de las víctimas, su funcionamiento como entidades sociales y políticas y, por

lo tanto, su capacidad de oposición social, política y militar al gobierno de Sudán, es posible afirmar que la supervivencia de los grupos *fur*, *masalit* y *zaghawa*, principalmente, fue amenazada –coincidiendo con Hagan y Rymond-Richmond (2009: xxii), quienes afirman que la posibilidad de restauración de la vida grupal permanece remota para las víctimas *fur*, *masalit* y *zaghawa*–.

Conclusión

Tras el análisis anterior, resulta evidente que:

1. El gobierno de Sudán fue responsable de las principales atrocidades masivas cometidas contra los grupos *fur*, *masalit* y *zaghawa*, fundamentalmente.
2. El gobierno de Sudán tuvo la intención de destruir total o parcialmente a los grupos *fur*, *masalit* y *zaghawa* de Darfur, principalmente.
3. Las víctimas de las atrocidades masivas perpetradas por el gobierno de Sudán y las milicias *janjawid* pertenecieron a grupos étnicos identificables y, a su vez, a una categoría racial impuesta por los perpetradores.
4. Los efectos inmediatos de las atrocidades masivas perpetradas por el gobierno de Sudán y las milicias *janjawid* amenazaron la supervivencia de los grupos *fur*, *masalit* y *zaghawa*, principalmente.

Dado que el gobierno de Sudán y las milicias *janjawid* promovieron, ejecutaron y consintieron políticas previstas para destruir –total o parcialmente– a los grupos étnicos *fur*, *masalit* y *zaghawa*, principalmente, a quienes politizaron al definirlos como sus enemigos fácticos o potenciales, la conclusión lógica es afirmar que cometieron un genocidio o un *politicidio*.

Finalmente, a pesar de que el principal motivo de la campaña de destrucción llevada a cabo por los perpetradores parece ser la eliminación de la base de apoyo de sus opositores políticos, en Darfur ocurrió un genocidio debido a que las víctimas fueron seleccionadas con base en una identidad racial impuesta o atribuida a grupos étnicos específicos, y no con base en una identidad política.

Factores causales relacionados con el genocidio de Darfur

Con el objetivo de identificar condiciones generales bajo las cuales un gobierno y las autoridades rivales en guerras internas recurren al genocidio o *politicidio*, Harff desarrolla un modelo estructural integrado por seis variables o factores causales relacionados con su ocurrencia: la agitación política, los genocidios anteriores, la orientación ideológica

de la élite gobernante, el tipo de régimen, el carácter étnico de la élite gobernante y la apertura comercial.

Este modelo es en gran parte politológico, pues se basa en factores relacionados con el sistema político y, particularmente, con atributos de la élite gobernante, además de considerar la influencia de la interdependencia internacional. Este sesgo se debe a que el genocidio es, en primera instancia, consecuencia de una decisión política que, además, requiere una capacidad de captación de recursos, organización y ejecución que generalmente solo los Estados y otras agrupaciones políticas logran acumular.

Agitación política

La segunda guerra civil sudanesa

En 1983 el presidente Yaafar Nimeiri (1969-1985) declaró a Sudán como un Estado islámico regido bajo la *sharia* (ley islámica) y abolió la Región Autónoma de Sudán del Sur, cancelando el Acuerdo de Adís Abeba. Tras esto, el sur se levantó en armas, iniciando la segunda guerra civil sudanesa (1983-2005).

La rebelión fue encabezada por el Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán (SPLA, por sus siglas en inglés), con John Garang como líder principal. A pesar de que su base se encontraba en el sur, Garang era un ávido defensor de la unidad nacional y afirmaba que todas las minorías marginadas de Sudán conformaban en realidad una mayoría y, como tal, tenían derecho a gobernar. El carácter incluyente y el éxito de su movimiento atrajeron a varios grupos sudaneses del norte, como los nubios de Kordofán del Sur, quienes posteriormente serían atacados durante las campañas de contrainsurgencia del gobierno sudanés. La guerra se prolongó durante décadas, extendiendo la inestabilidad política a otras regiones del país.

En 2001 comenzó el proceso de paz gracias a que durante la presidencia de Bush los Estados Unidos de América (EUA) cambiaron su política con respecto al conflicto en Sudán, impulsando un acuerdo dirigido por la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD, por sus siglas en inglés), con apoyo financiero, técnico y diplomático de las potencias occidentales. Una vez que la paz fuera alcanzada, los EUA comenzarían a normalizar sus relaciones con Sudán.

Poco tiempo después, tras los atentados del 11 de septiembre, cuyo supuesto principal organizador fue el antiguo protegido de Jartum, el gobierno sudanés comenzó una cercana relación de trabajo con la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) sobre contraterrorismo (Flint y De Waal, 2008: 181).

La guerra de Darfur

Los orígenes de la guerra de Darfur pueden rastrearse en la marginación de la región de Darfur y la exclusión política de sus habitantes en general, especialmente de grupos africanos como los *fur*, los *masalit* y los *zaghawa*, entre otros, llevadas a cabo por los subsecuentes gobiernos sudaneses, constituidos predominantemente por miembros de los grupos árabes provenientes de la región del Nilo, en el norte del país.

A nivel regional, la guerra podría ser explicada a partir de la intensificación de los conflictos derivados de la competencia económica y política entre grupos árabes y africanos. Por una parte, el proceso de desertificación en la región provocó el desplazamiento de grupos sedentarios –en su mayoría africanos– a territorios más fértiles e irrigados y la reconfiguración de los patrones migratorios estacionales de grupos nómadas –mayoritariamente árabes–. Esto derivó en enfrentamientos territoriales entre ellos.

Por otra parte, la marginación económica, política y cultural de Darfur, consecuencia de las políticas de centralización y arabización del gobierno de Sudán, provocó el surgimiento de movimientos políticos regionales que desafiaron las imposiciones económicas, políticas y culturales de la élite gobernante. Ante esto, el gobierno central favoreció el predominio político de los grupos árabes en la región, con lo cual dichos movimientos políticos regionales fueron adquiriendo dimensiones étnicas. La competencia hostil generada entre los movimientos políticos que defendían los intereses de grupos árabes, por un lado, y los grupos africanos, por el otro, aunada al desinterés del gobierno central en la resolución de las disputas, derivó en la etnización y en la intensificación de dichos conflictos.

De manera adicional, el flujo de armas automáticas en Darfur aumentó progresivamente a partir de los años ochenta, como consecuencia tanto de las incursiones de grupos armados involucrados en las guerras de Chad –autorizadas por el régimen como parte de su acuerdo con Muamar Gaddafi–, como de la provisión de armamento a grupos árabes por parte del gobierno sudanés.

La fecha más plausible es el 21 de julio de 2001 (Flint y De Waal, 2008: 82), cuando un grupo de *fur* y *zaghawa* se reunió en Abu Gamra y juró ante el Corán defenderse de las políticas supremacistas árabes en Darfur.

En noviembre de 2001 el grupo hizo contacto con activistas *masalit*, para constituir el Frente de Liberación de Darfur, que posteriormente dio origen al SLA. El 25 de febrero de 2002 los rebeldes llevaron a cabo su primera operación conjunta al atacar una guarnición al sur de Jebel Marra, entre Nyala y Tur (Flint y De Waal, 2008: 83).

Mientras la guerra comenzaba, en Darfur hubo sospechas entre los oficiales del gobierno acerca de la participación del SPLA con el objetivo de extender la guerra civil del sur a Darfur, y sobre una conspiración de al Turabi para destituir al régimen. Sin embargo, el SLA no tenía aspiraciones separatistas. Sus peticiones incluían la amnistía y

el reconocimiento como movimiento político, un compromiso del gobierno para implementar proyectos de desarrollo en Darfur y un gobierno autónomo dentro de un sistema federal.

Los rebeldes se anunciaron públicamente en febrero de 2003. El primero fue el SLA, seguido por el segundo movimiento rebelde de Darfur, el JEM. El 25 de marzo los rebeldes se apoderaron de la guarnición de Tine, en la frontera con Chad, y capturaron grandes reservas de armamento y equipo. El JEM era visto por el gobierno como el ala militar del Partido del Congreso Popular (PCP), que representaba la mayor amenaza política para el Partido del Congreso Nacional (PCN) en Jartum.

En ese momento, las fuerzas armadas ya habían sido desplegadas con escasos resultados. Sin preparación para guerras en el desierto, el Ejército había perdido la mayoría de las batallas, dependiendo cada vez más de su fuerza aérea. A principios de abril elementos del gobierno y milicias *janjawid* ubicados en el área de Kutum habían atacado Ain Siro, base principal del SLA, con artillería, apoyados por bombarderos Antonov y helicópteros de combate que operaban desde la principal base aérea de Darfur, en El Fasher. Las aldeas de Sambo y Mangori fueron quemadas.

Informados de que el gobierno estaba planeando otro ataque, el 25 de abril los rebeldes atacaron la base aérea de El Fasher, destruyendo siete aviones, matando a más de setenta soldados, pilotos y técnicos, y capturando al general de división Ibrahim Bushra Ismail, junto a más de treinta de sus hombres y una importante cantidad de armamento. Este ataque marcó la transformación de la guerra de Darfur de una rebelión provincial, en un conflicto bélico de primera importancia para el aparato estatal de Sudán.

Jartum se negó a otorgar el reconocimiento político al SLA y se enfocó en movilizarse para una solución militar. Para esto se estableció un área de operaciones a lo largo de la frontera con Chad, se impuso un toque de queda en todo Darfur del Norte y más de ciento cincuenta personas fueron arrestadas (Flint y De Waal, 2008: 122).

Según O'Fahey (2006: 29), parecía estar desarrollándose una guerra de dos niveles: uno, en el que existía una intensificación de los conflictos locales sobre el control de los recursos y que interactuó con el segundo nivel, representado por la guerra entre los grupos rebeldes en contra de las fuerzas del gobierno y las milicias *janjawid*.

Vinculación con el genocidio

Según Harff, la agitación política es un cambio abrupto en la comunidad política que puede ser causado por la formación de un Estado o régimen a través de un conflicto violento, como una guerra internacional, una revolución, una rebelión anticolonial, una guerra separatista, un golpe de Estado o una transición de régimen.

Con respecto a esta idea, y con base en la revisión histórica realizada, puede afirmarse que, el que a partir de ahora será llamado el genocidio de Darfur, ocurrió en el contexto de dos casos de agitación política principales: la segunda fase de la guerra civil sudanesa y la guerra de Darfur, ambos conflictos civiles armados de gran magnitud que amenazaron al gobierno de Sudán.

En relación con la vinculación de este factor causal con la ocurrencia de un genocidio, Harff señala que mientras más intenso y persistente ha sido el conflicto, más probable es que las autoridades estén más amenazadas y más dispuestas a tomar medidas extremas, además de que cuanto mayor es el alcance de la disrupción política, mayores son las oportunidades para que las autoridades recurran al genocidio o *politicidio* para desafíos presentes y futuros.

La segunda fase de la guerra civil sudanesa, que ya se había prolongado por veinte años durante el inicio de las principales acciones genocidas del gobierno de Sudán y trajo como consecuencia la separación de la República de Sudán del Sur, región donde se encontraba la mayor parte del petróleo sudanés, representó una agitación política de gran magnitud, amenazando no únicamente los intereses económicos del gobierno de Sudán sino su permanencia en el poder.

El estallido de la guerra de Darfur, mientras el gobierno de Sudán se encontraba inmerso en la segunda fase de la guerra civil sudanesa, aunado a la incapacidad del ejército de Sudán para combatir a los ejércitos rebeldes en el desierto, generó una amenaza a la permanencia del régimen, que entonces decidió recurrir a “medidas extremas”, es decir, una campaña de contrainsurgencia que resultó en la amenaza a la supervivencia de los grupos *fur*, *masalit* y *zaghawa*, principalmente, considerados como la base de apoyo de los rebeldes.

Además, la disrupción política generada por la rebelión, sumada a la representación de la guerra como un conflicto entre tribus árabes y africanas y a la utilización de las milicias *janjawid* como grupos paramilitares, creó condiciones y oportunidades más favorables para que el gobierno de Sudán recurriera efectivamente al genocidio.

Genocidios anteriores

Las milicias árabes

En julio de 1985, dos meses después del derrocamiento de Nimeiri, ante la incursión del SPLA en Kordofán y el riesgo de que la guerra se extendiera al norte, el presidente transitorio, el general islamista Abdel Rahman Suwar al Dahab, envió a su ministro de Defensa a Kordofán y a Darfur para movilizar a los grupos árabes contra el SPLA.

Para esta labor fueron seleccionados ex oficiales del ejército y comandantes *ansar*² para encabezar las milicias árabes, que fueron proveídas con armas y apoyo militar a cambio de libertad absoluta para apropiarse de las posesiones de grupos africanos, como los *dinka* y los nubios, sospechosos de apoyar a los rebeldes. Referidas eufemísticamente por oficiales como “fuerzas amistosas” y coloquialmente como *murahaliin* –nómadas– o *fursan* –jinetes–, estas milicias se volvieron notorias en abril de 1987, cuando más de mil *dinka* desplazados fueron asesinados a tiros y quemados vivos en Da’ien –Darfur sudoriental–, en represalia por ataques del SPLA contra milicianos árabes (Flint y De Waal, 2008: 23).

Según O’Fahey (2006: 26-27), la militarización de los conflictos se incrementó durante el gobierno democrático de Sadiq al Mahdi (1986-1989), a partir de que fueron entregadas armas a grupos árabes en el sur de Darfur, con el objetivo supuesto de defenderse del SPLA. Sin embargo, más tarde comenzaron a utilizar esas armas para resolver las pugnas con sus vecinos del norte, como los *fur* y los *masalit*.

Mientras tanto, beneficiado por las armas traídas de Libia, el gobierno de Sudán permitió que el coronel Muammar Gaddafi utilizara a Darfur como base militar para sus guerras contra Chad. Así, miles de tropas de la Legión Islámica y árabes chadianos cruzaron el desierto hacia Darfur, incrementando las tensiones entre los grupos de la región. Esto produjo una guerra entre los árabes y los *fur* (1987-1989), en que las milicias árabes, apoyadas y equipadas por el gobierno sudanés, llevaron a cabo miles de asesinatos, y cientos de aldeas de grupos africanos fueron quemadas.

Para 1988 la guerra chadiana se había transformado en bandidaje y despojo de tierras coordinados en Darfur. Hasta este momento, la palabra *janjawid* se había referido a bandas forajidas de beduinos, con raíces en las palabras árabes *jim* (la letra g, en referencia al rifle G3), *jinn* (diablo) y *jawad* (caballo). Sin embargo, durante ese período por primera vez fue utilizada para nombrar a una milicia étnica (Flint y De Waal, 2008: 54-55).

En el marco de una conferencia *intertribal*, fue convenido un acuerdo de paz que puso fin a la guerra entre árabes y *fur*. Sin embargo, el presidente, interesado en su alianza estratégica con Libia, no tenía intenciones de hacer cumplir el acuerdo de paz. Esto provocó descontento entre la gente de Darfur, aunado a los problemas provocados por la falta de apoyo gubernamental ante la gran sequía de 1990 (Flint y De Waal, 2008: 24).

Entonces, el SPLA encontró en Daud Bolad, un *fur* ex militante de los Hermanos Musulmanes, resentido por la discriminación étnica de la élite sudanesa del Nilo, una oportunidad de extenderse en Darfur, otra región con una mayoría africana oprimida y marginada.

² Término que significa “ayudantes” y hace referencia a los ciudadanos de Medina que ayudaron a Mahoma y lucharon en nombre del Islam. En Sudán fue utilizado para nombrar a los seguidores del Madhi, líder de la revolución de 1885, y a diversos movimientos islamistas inspirados en ella.

Algunas tropas del SPLA lideradas por Daud Bolad y Abdel Aziz Adam al Hilu entraron a Darfur en diciembre de 1991. Sin embargo, antes de que pudieran llegar a Jebel Marra, una fuerza conjunta del ejército y milicias *fursan*, integradas por árabes *beni halba*, los atacó. Bolad fue torturado y asesinado, mientras su red fue perseguida y desmantelada. En represalia por la rebelión, docenas de aldeas *fur* fueron quemadas. De acuerdo con O'Fahey (2006: 27), fue en este período cuando las milicias árabes, en un principio llamadas *mura-hilin* y después *janjawid*, comenzaron a salir de control.

En lugar de consolidar las instituciones gubernamentales, el régimen islamista continuó con la antigua práctica de dividir y vencer, convirtiendo a los grupos étnicos en fuerzas paramilitares de contrainsurgencia de primera línea. De acuerdo con Flint y De Waal (2008: 23), esta fue posiblemente la decisión más desastrosa de todas las guerras civiles sudanesas.

Estas milicias étnicas, apoyadas por inteligencia militar y bombardeo aéreo, tenían un modo de operación sistemático que incluía la quema de aldeas, violaciones, asesinatos y saqueos, y llevaron a cabo ataques en las regiones de Bahr el Ghazal, entre 1986 y 1988, en los Montes Nuba, entre 1992 y 1995, y en el Nilo superior, entre 1998 y 2003, además de otras regiones en menor escala.

Vinculación con el genocidio

Según Harff (2003: 60), durante la primera guerra civil sudanesa fue llevado a cabo un *politicidio* con víctimas comunales, en el que fueron asesinadas entre 400 mil y 600 mil personas, mientras en la segunda fase de esta guerra, 2 millones de personas fueron exterminadas por distintos gobiernos sudaneses, llevando a cabo un segundo *politicidio*, con víctimas comunales en el país. Por lo tanto, el genocidio de Darfur fue precedido por dos *politicidios* con víctimas comunales, perpetrados por distintos gobiernos sudaneses, incluyendo al que encabeza el presidente Omar al Bashir.

Harff observa que los perpetradores de genocidio o *politicidio* a menudo son ofensores repetitivos, debido a que las élites y las fuerzas de seguridad pueden habituarse al asesinato de masas como una respuesta estratégica hacia los desafíos a la seguridad estatal y, también, porque los grupos atacados rara vez son destruidos en su totalidad.

En este sentido, el genocidio de Darfur ocurrió, en parte, debido a que el actual gobierno de Sudán y las milicias *janjawid* se encontraban habituados a recurrir a los asesinatos de masas como respuesta estratégica hacia los desafíos a la seguridad estatal originados por el avance del SPLA durante la segunda fase de la guerra civil sudanesa, además de utilizar milicias étnicas en los ataques de aldeas en Bahr el Ghazal (1986-1988), en los Montes Nuba (1992-1995) y en el Nilo Superior (1998-2003), y otras regiones en menor escala.

Orientación ideológica de la élite gobernante

El islamismo

De acuerdo con Sidahmed y Sidahmed (2005: 50), la relación entre el islam y el Estado ha sido una fuente de debate intensivo en relación con la forma constitucional del Estado, su sistema legal y la orientación cultural y sociopolítica general del país. También es un asunto que atraviesa el debate sobre la identidad del país: árabe/islámica, afro/árabe, africana o exclusivamente sudanesa.

Es importante señalar que, desde el principio de la vida independiente de Sudán, los principales partidos del norte estuvieron basados en afiliaciones sectarias o religiosas y, por lo tanto, eran considerados como poseedores de una orientación islámica en términos generales. Sin embargo, estos partidos no lideraron una *yihad* islámica en contra del Estado imperial dominado por los británicos, ni buscaron un estado islámico alternativo a este después de la Independencia.

Sin embargo, cuando el Frente Islámico Nacional (FIN) se unió al gobierno, su principal justificación para volverse parte de la coalición gobernante fue el fomento de la imposición de leyes islámicas en Sudán. De esta forma, el nuevo régimen construyó su legitimidad sobre la imposición de la *sharia* y la islamización del Estado y la sociedad (Sidahmed y Sidahmed, 2005: 52).

El principal objetivo ideológico del régimen era la reconstrucción del Estado sudanés con el partido y un individuo como el centro de poder. Después de reprimir y perseguir a la oposición y controlar a los órganos estatales, el gobierno se movilizó para islamizar al país.

Para esto fue elaborado un plan integral de transformación social, el “proyecto de civilización” y la “llamada integral a Dios”, con la finalidad de construir una república islámica y consolidar un nuevo electorado islamista. Una pieza central para lograr el cambio de acuerdo con el plan del régimen fue la creación del Ministerio de Planificación Social, establecido en 1993 y encargado a Ali Osman Mohamed Taha, el principal actor civil detrás del golpe de Estado de 1989.

A nivel general, la ambiciosa agenda del régimen lo llevó a adoptar grandes planes para lograr el cambio social y político de acuerdo con su visión. En 1993 el régimen promulgó el “llamado islámico” buscando el adoctrinamiento islámico basado en las percepciones del FIN. Entonces buscó imponer el islam sobre los no musulmanes, desalentando la práctica de creencias africanas o cristianas, además de llevar a cabo la *yihad* en contra de aquellos que se opusieran al llamado –fueran musulmanes o no–. Para esto fue creado un programa socioeconómico y político que favorecía a los musulmanes en el sur y a los miembros y simpatizantes del régimen en el norte (Sidahmed y Sidahmed, 2005: 60).

En contraste con esta serie de medidas que, a pesar de haber sido impuestas fueron menos violentas, en 1992 el gobierno declaró una *yihad* contra el SPLA. De este modo, presentó

a la guerra contra los ciudadanos rebeldes del sur como un conflicto religioso, a pesar de que muchos de estos eran musulmanes, como quienes luchaban en los Montes Nuba.

Sidahmed y Sidahmed (2005: 53) consideran que este impulso islamizador, tanto en el ámbito legal como social, no solo representó la implementación de un programa ideológico sino también un discurso de legitimación. Esto resalta en el hecho de que los órganos de propaganda del régimen argumentaron que todas las críticas y las sanciones, tanto internas como externas, estaban motivadas por su odio al islam y a la orientación islámica de Sudán, y no por la naturaleza del régimen militar o sus violaciones a los derechos humanos. De este modo, el régimen logró preservar la hegemonía de la cultura árabe e islámica en una sociedad tan diversa como Sudán.

El arabismo

De acuerdo con Deng (1995: 486), como consecuencia de la estratificación racial asociada con modelos ideológicos en que los árabes son considerados superiores a los africanos, la asimilación de la cultura árabe en el norte ha producido una autoconcepción que, a pesar de la evidencia visible, niega o rechaza el origen genético africano.

Las políticas de arabización e islamización encaminadas al establecimiento de un Estado islámico en Sudán son la culminación del proceso de autoafirmación defensiva de la élite gobernante, la cual, a su vez, se ha vuelto violentamente ofensiva. Esto se debe a que mientras más ha sido cuestionada o desafiada –por parte de la mayoría africana– la imposición de esta percepción árabe/islámica en el país, más coercitiva y violentamente ha sido esta afirmada por la minoría árabe gobernante, incluso con el respaldo moral y material de otros gobiernos árabes/islámicos.

Como consecuencia de las particularidades de la asunción de esta identidad árabe –la cual no resiste, incluso, el escrutinio en los mismos términos en que ha sido planteada, ya sea la pertenencia racial, el origen ancestral o la herencia genética–, la amenaza de degradación a un estatus inferior es continua. Esto ha resultado ser una fuente de gran inseguridad en caso de una revisión o redefinición de la identidad nacional, especialmente entre la élite gobernante, que recibe grandes beneficios de su identidad privilegiada, la cual ha asociado deliberadamente con la identidad nacional.

Por lo tanto, la élite gobernante –con intereses creados en el statu quo– ha resistido y reprimido los movimientos sociales y políticos encabezados principalmente por distintos grupos africanos debido a sus implicaciones con respecto a la reevaluación y la reclasificación de las identidades étnicas y raciales. Como el caso de la separación de Sudán del Sur ilustra, las consecuencias de tales procesos pueden extenderse a los ámbitos social, económico y político, entre otros.

Deng (1995: 486) continúa su análisis señalando que existe una realidad aún inexplorada de la identidad sudanesa que está representada en la composición racial, étnica y cultural del país, reflejando tanto amalgamamiento como diversidad de elementos.

Por su parte, O’Fahey (2006: 27) afirma que el arabismo (*‘arabiyya* o *‘uruba*) en Darfur tiene profundas raíces en el nacionalismo sudanés del norte y que desde el inicio del gobierno de Omar al Bashir –cuyo régimen no solo es islamista sino *arabocéntrico*– la etnización de los conflictos en la región de Darfur se incrementó. Por su parte, Flint y De Waal señalan que la noción de superioridad árabe ha sido un atributo de la sociedad sudanesa del norte por siglos (2008: 49), sin embargo, van más allá, ubicando el origen del supremacismo árabe en Darfur en la relación de cooperación establecida entre los Hermanos Musulmanes y Muamar Gaddafi durante los setenta (2008: 47).

En Darfur, los primeros signos de una plataforma política racista árabe surgieron a principios de los ochenta. Los candidatos tomaron dimensiones étnicas durante las elecciones regionales de 1981. Dado que los grupos árabes se encontraban divididos, Ahmad Diraige se convirtió en el primer *fur* en gobernar Darfur desde el fin del sultanato (Flint y De Waal, 2008: 49).

Los árabes de Darfur estaban alarmados por la elección de Diraige y la reafirmación *fur* que le siguió. Durante este período, folletos y grabaciones provenientes de un grupo que se autodenominó la Congregación Árabe comenzaron a ser distribuidos anónimamente, reclamando que los *zurga* habían gobernado Darfur demasiado tiempo. Afirmaron que los árabes constituían una mayoría en Darfur y llamaron a prepararse para tomar el gobierno regional, por la fuerza si era necesario, y cambiar el nombre de Darfur (Flint y De Waal, 2008: 49).

Poco después fue evidente que Gaddafi y el FIN tenían intereses comunes cuando establecieron un acuerdo de armamento de 250 millones de dólares. Poco después del golpe de Estado de Omar al Bashir, ambos líderes anunciaron ambiciosos planes de cooperación, incluyendo el libre tránsito de personas entre sus países.

En una declaración con rasgos arabistas Gaddafi enfatizó la unidad entre el arabismo y el islamismo diciendo: “Nosotros [los árabes] somos los *imams*. Nosotros somos responsables del islam, el cual fue revelado en nuestra lengua. Es nuestro libro y nuestro profeta solamente. No aceptamos que un extranjero venga a nosotros con sus ideas” (Flint y De Waal, 2008: 55).

Vinculación con el genocidio

El gobierno de Sudán ha buscado la consolidación de un Estado islámico gobernado sobre la base de la ley *sharia*. Esto se encuentra evidenciado por la inclinación islamista de la élite gobernante sudanesa y se ha materializado en la imposición de leyes islámicas, las

campañas de islamización, el apoyo a grupos islámicos extremistas y el establecimiento de organizaciones para fomentar, financiar y organizar movimientos y cambios de régimen islamistas en otros países.

Por otra parte, la élite gobernante sudanesa presenta, a su vez, características mencionadas en el cuarto punto, al ser defensora del arabismo, una doctrina de superioridad étnica árabe que discrimina y margina a miembros de los grupos étnicos africanos de Sudán. Esta orientación ideológica de la élite sudanesa sirvió como base para la utilización del término *zurga* –negro– en contra de los grupos *fur*, *masalit* y *zaghawa* de Darfur, principalmente.

De acuerdo con Hagan y Rymond-Richmond (2009, XXI-XXII), al consolidar la identidad de varios grupos étnicos como negros, en un modo despectivo, el gobierno de Sudán hizo posible la identificación y la deshumanización de una agrupación ampliada y combinada de diversos grupos étnicos, facilitando la focalización y la organización de los asesinatos, las violaciones, el desplazamiento y la destrucción de estos.

En conclusión, la orientación islamista y arabista de la élite gobernante en Sudán representó la articulación de sistemas de creencias que identificaron a la supervivencia del Estado islámico como propósito y a la supremacía árabe como principio fundamental para justificar las campañas de marginación, persecución y destrucción de los “enemigos del Estado” (categoría política) y los “*zurga*” (categoría racial).

Tipo de régimen

El régimen de Omar al Bashir

El 30 de junio de 1989 fue llevado a cabo un golpe de Estado contra el gobierno de Sadiq al Mahdi que interrumpió las negociaciones de paz con el SPLA y la realización de una asamblea constitucional (Sidahmed y Sidahmed, 2005: 49).

Los instigadores reales del golpe de Estado eran parte de la élite central civil del FIN, como Ali Osman Mohamed Taha, líder de la delegación parlamentaria del FIN durante el gobierno de Sadiq al Mahdi (1986-1989), Hassan al Turabi, el coronel Omar al Bashir, Awad al Jaz y Nafi Ali Nafi.

En el plan original, el ejército tenía funciones asignadas temporales y específicas, como tomar el poder, servir –al menos inicialmente– como camuflaje para la identidad islámica real de los instigadores del golpe de Estado, y asegurar la protección del régimen hasta que los islamistas adquirieran completo control del Estado.

Tras el golpe de Estado, Omar al Bashir creó un órgano de gobierno que reemplazó al FIN. Al Turabi y Ali Osman fueron enviados a prisión junto a Sadiq al Mahdi y otros miembros depuestos del gobierno. Sin embargo, al Turabi y Ali Osman continuaron participando secretamente en este, hasta que fueron integrados al nuevo régimen.

Con la finalidad de afirmar su hegemonía en el país, el régimen decidió atacar a los civiles y militares que representaran cualquier tipo de oposición, recurriendo a una represión y una violencia sistemáticas que, de acuerdo con Sidahmed y Sidahmed (2005: 57), no tuvo precedentes en la historia de Sudán. Dentro de esta estrategia, la invención más notoria fue la introducción de las “casas fantasma”, edificios secretos donde se detenía, torturaba y asesinaba a los opositores.

Por otra parte, una de las amenazas más grandes al régimen estuvo representada por la serie de golpes de Estado que culminó con el intento de derrocamiento de 1990 contra al Bashir. Tras reprimir la conspiración, en la noche del 23 y el 24 de abril de ese año, el gobierno ejecutó a veintiocho oficiales que fueron enterrados en fosas comunes, prohibiéndole a sus familias recuperar sus cuerpos.

Esto fue seguido de purgas generales en el ejército, el ministerio de seguridad y la burocracia. En poco más de cuatro años, el gobierno despidió, de varios órganos y departamentos estatales, a más de setenta y tres mil personas (Sidahmed y Sidahmed, 2005: 58), que fueron reemplazadas por miembros del FIN para asegurar la ejecución de las políticas del régimen y el control de los recursos del país. Para lograrlo fueron utilizadas las organizaciones islámicas filantrópicas, las cuales recibieron exenciones fiscales para importar y vender bienes, desplazando a los empresarios convencionales.

Desde el principio, el nuevo régimen estableció organizaciones de seguridad, policía e incluso un gobierno paralelos. La principal de estas fue un grupo secreto conocido como *al-tanzim* (o Consejo de los Cuarenta Hombres), liderado por al Turabi, que diseñó las políticas y controló todos los sectores vitales del país durante la primera década del gobierno de al Bashir.

La ideología de los miembros del ministerio de seguridad dominó la orientación y las políticas de esta organización secreta. Casi todas sus figuras clave tenían antecedentes en el ministerio de seguridad y se encontraban profundamente involucrados en el aparato de seguridad del FIN, incluso antes del golpe de Estado, a pesar de que la mayoría de ellos no era militar (I.D.F. y Assal, 2010: cap. 1).³

De este modo, el control de los islamistas sobre el aparato político y económico del país se consolidó durante el primer año del régimen, el cual dejó de ocultar su conexión con el FIN a partir de 1991.

En 1992, con la implementación del federalismo, el régimen creó un gobierno propio para cada región y, principalmente, un poder militar que podría actuar como un centro alternativo, incluso cuando Jartum cayera ante la oposición. A pesar de la descentralización que esto implicó, la apertura política siguió siendo superficial en vista de la hegemonía de

³ En las citas bibliográficas de esta fuente no se especifica el número de página debido a que es un archivo digital *e-pub*, por lo que los números de página varían de acuerdo con el tamaño de fuente seleccionado.

la élite gobernante sobre las estructuras federales y estatales (Sidahmed y Sidahmed, 2005: 61). En 1993, el órgano de gobierno fue disuelto y sus facultades fueron asumidas por el presidente al Bashir y la Asamblea Nacional Transitoria.

Otra característica determinante de la élite gobernante sudanesa es el hecho de que cada facción ha utilizado el aparato estatal para controlar y acumular recursos para su beneficio y supervivencia. Tal ha sido el caso del petróleo y del aparato de seguridad oficial y no oficial.

Al mismo tiempo, estos sectores y recursos estratégicos han sido interdependientes. Las interconexiones y la interdependencia entre el ejército, los cuerpos de seguridad, el PCN y los círculos empresariales fueron vitales para la supervivencia de ambas facciones. Muchos militares y oficiales de seguridad han estado involucrados en negocios privados, además de que el ejército y el aparato de seguridad han invertido en el sector privado. Las concesiones petroleras, por ejemplo, estuvieron garantizadas por las fuerzas armadas (I.D.F. y Assal, 2010: cap. 1).

Vinculación con el genocidio

De acuerdo con Harff, las autocracias son regímenes en los que la participación de los ciudadanos está fuertemente restringida; los altos ejecutivos son seleccionados dentro de la élite política; y, una vez en el cargo, los altos funcionarios ejercen el poder con pocas o ninguna restricción institucional. Con base en un análisis del régimen sudanés surgen las siguientes inferencias:

1. Dado el origen del régimen a través de un golpe de Estado, la existencia de una dictadura militar desde 1989 y los numerosos y frecuentes casos de censura, represión, encarcelamiento, tortura y asesinato de opositores políticos, puede afirmarse que la participación de los ciudadanos se encontraba fuertemente restringida en Sudán.
2. Debido a que las principales figuras del gobierno de Sudán pertenecían al Partido del Congreso Nacional, parece evidente que los altos funcionarios del gobierno sudanés fueron seleccionados dentro de la élite política.
3. Ya que el Partido del Congreso Nacional mantuvo un control casi absoluto sobre el aparato estatal sudanés, y debido a la censura, represión, encarcelamiento, tortura y asesinato de opositores políticos, los altos funcionarios ejercieron el poder con pocas restricciones institucionales.

Con base en estos tres puntos, el régimen encabezado por el gobierno de Sudán puede ser considerado como una autocracia.

Puede argumentarse que estos atributos autocráticos del régimen sudanés incidieron en la ocurrencia del genocidio de Darfur debido a que la ausencia de elecciones competitivas

permitió que los adherentes de ideologías excluyentes tomaran el poder, en primer lugar, y fueran elegidos para ocupar altos cargos por los miembros de la élite gobernante. Por otra parte, la ausencia de normas y prácticas democráticas que favorecieran la protección de los derechos de los grupos africanos y la inclusión de los opositores políticos, aunada a la carencia de controles institucionales que constriñeran la capacidad del gobierno de Sudán para utilizar la violencia masiva en contra de la población civil, favorecieron la planeación, la organización y la ejecución de estrategias genocidas en contra de los grupos *fur*, *masalit* y *zaghawa*, principalmente.

Carácter étnico de la élite gobernante *La élite gobernante de Sudán*

Según Deng (1995: 484), la crisis de identidad nacional en Sudán se debe a que los sudaneses árabes del norte, que constituyen la élite política y económica, a pesar de ser los productos de la mezcla genética árabe y africana y una minoría en el país en su conjunto, se consideran principalmente árabes, niegan el elemento africano en ellos mismos y buscan imponer su identidad autopercebida en todo el país. Esto ocurre con respecto a los grupos africanos en el norte y los grupos cristianos y animistas del sur, quienes en conjunto constituyen la gran mayoría nacional.

De este modo, la minoría árabe gobernante ha buscado definir a Sudán y a su sociedad con respecto a dicha autopercepción, la cual constituye una distorsión de su identidad compuesta árabe y africana, en la cual el elemento fenotípico africano es más visible y, por lo tanto, negado más activamente.

En mayo de 2000 *El libro negro: desbalance de poder y riqueza en Sudán* fue repartido clandestinamente en Jartum y posteriormente en otras partes de Sudán (excepto el sur) y en el extranjero. Sus creadores fueron opositores políticos que posteriormente integrarían el JEM y participarían en la guerra de Darfur.

A través de un análisis detallado de dónde se ubicaba el poder político y económico en Sudán, se documentó cómo el aparato estatal había sido dominado, desde la Independencia, por una élite conformada por miembros de tres grupos étnicos ubicados a lo largo del Nilo, al norte de Jartum: los *ja'aliyiin* del presidente Omar al Bashir, los *shaygiya* del vicepresidente Ali Osman Mohamed Taha y Salah Gosh, y los *danagla* del ministro de Defensa Bakri Hassan Saleh. El documento también mostró que todas las demás regiones de Sudán habían sido sumamente marginadas (Flint y De Waal, 2008: 16).

Compilado considerablemente por hombres que se habían unido al movimiento islámico en su juventud, el texto afirmó que la vasta mayoría de los cargos públicos y la burocracia centrales estaba en manos de miembros de los grupos étnicos mencionados, que representaban solo 5.4% de la población total de Sudán. Este documento también señaló que los habitantes del norte eran abrumadoramente dominantes en la jerarquía policial y militar, el

Poder Judicial, las administraciones provinciales, los bancos y los programas de desarrollo. Todos los presidentes habían provenido de esta región, al igual que la mayoría de los altos ministros y generales (Flint y De Waal, 2008: 17).

Vinculación con el genocidio

Harff dice que la etnia de la élite es prominente políticamente si la identidad étnica o religiosa de los presidentes, primeros ministros y otros altos funcionarios es una causa recurrente de disputa o conflicto político. Si es así, Harff hace una distinción adicional para determinar si la dirigencia política en un período dado representa al grupo comunitario más grande en un país o uno más pequeño, ya que mientras más estrecha es la base étnica de un régimen, mayores son los riesgos de un conflicto que escale a niveles genocidas.

Dado que la mayoría de los cargos públicos –incluyendo al presidente, al vicepresidente y al ministro de Defensa– y la burocracia centrales de Sudán estaban dominados por funcionarios pertenecientes a tres grupos étnicos –los *ja'aliyin*, los *shaygiya* y los *danagla*–, que correspondían únicamente a 5% de la población total de Sudán, resulta evidente que la élite gobernante de Sudán representaba a una minoría étnica.

Por otra parte, dada la publicación de *El libro negro: desbalance de poder y riqueza en Sudán* en mayo de 2000, que criticó el dominio del aparato estatal por parte de estos tres grupos étnicos ubicados en la región del Río Nilo al norte de Jartum –además de las denuncias llevadas a cabo por los distintos grupos de oposición política y ejércitos rebeldes surgidos en Darfur, con respecto a la marginación social, económica y política de los grupos africanos en favor de los grupos árabes, vinculados étnicamente a la élite sudanesa–, puede afirmarse que la identidad étnica de la élite sudanesa fue políticamente prominente.

Para explicar la vinculación entre este factor causal y la ocurrencia de un genocidio, Harff señala que si la élite representa desproporcionadamente a un segmento en una sociedad heterogénea, es probable que algunos grupos poco representados desafíen la falta de representatividad de la élite y es posible que esta, por su parte, temiendo tales desafíos, defina sus intereses y su seguridad en términos comunitarios, diseñando políticas de exclusión racial o defendiendo un nacionalismo excluyente.

En el caso del genocidio de Darfur, parece ser que, debido a que el gobierno de Sudán representaba desproporcionadamente a los *ja'aliyin*, los *shaygiya* y los *danagla*, además de los grupos árabes de Darfur, marginando a los grupos *fur*, *masalit* y *zaghawa*, principalmente –definidos por este como *zurga*–, grupos rebeldes como el SLA y el JEM desafiaron la falta de representatividad de la élite al incrementarse “la prominencia de la identidad grupal y su movilización para la acción política” (Gurr, citado en Harff, 2003: 64). Esta, a su vez, amenazada por el desafío presentado por la guerra de Darfur, definió sus intereses y la

seguridad de su régimen con base en su identidad étnica, llevando a cabo campañas para marginar, perseguir y destruir a los grupos incluidos en la categoría racial *zurga*.

Apertura comercial

El aislamiento internacional del gobierno sudanés

Desde su llegada al poder, el gobierno de al Bashir tuvo el objetivo de alcanzar la autosuficiencia y transformar a Sudán en una potencia regional, para lo cual eran necesarias la liberalización del mercado, la atracción de inversión y, principalmente, la obtención de fondos de las organizaciones financieras internacionales.

Tras el golpe de Estado de al Bashir, se dieron varias rondas de negociaciones y visitas que no lograron resultados. A pesar de que en 1992 fue implementado el programa de liberalización y privatización, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras organizaciones siguieron rechazando las peticiones del régimen, ya que el gobierno de Sudán era considerado como parte del bando antioccidental. En 1993, el FMI retiró los derechos de votación de Sudán y el Departamento de Estado de los Estados Unidos añadió a Sudán a la lista de países que apoyaban el terrorismo estatal.

Sin embargo, en marzo de 1997 Sudán llegó a un acuerdo con el FMI para pagar un monto mensual e implementar cambios en la administración económica. Como consecuencia, fue pospuesta la expulsión de Sudán del FMI y, en agosto de 1999, el FMI retiró su declaración de no cooperación en contra de Sudán, establecida en 1990, y un año después le devolvió el derecho de voto.

Sidahmed y Sidahmed (2005: 106) afirman que, a pesar del mejoramiento de sus relaciones con el FMI y el hecho de que el gobierno sudanés haya tenido la posibilidad de beneficiarse de las iniciativas de la comunidad internacional para países pobres altamente endeudados, su récord de derechos humanos, la larga guerra civil y sus tensas relaciones con las potencias y los organismos regionales y mundiales han restringido gravemente su obtención de fondos internacionales, aislándolo financieramente.

Las compañías chinas son los inversionistas más importantes de Sudán, habiendo invertido aproximadamente 20 mil millones de dólares en el país, además de préstamos, subvenciones y otras formas de ayuda. Adicionalmente, las corporaciones chinas son los principales productores en el país y China importa 60% del petróleo producido en Sudán (Taylor, 2010: cap. 8).

De acuerdo con Sidahmed y Sidahmed (2005: 83), las compañías chinas se encuentran en la industria petrolera sudanesa por razones estratégicas, más que comerciales. China se volvió un importador neto de petróleo en 1993 y ha utilizado una estrategia consistente de adquirir participaciones en pozos petroleros extranjeros, de los cuales piensa acumular

suficiente cantidad de hidrocarburo para asegurar su abasto en tiempos de escasez. Esta es la razón por la que ha decidido adoptar una política agresiva, incluso pagando precios superiores a los del mercado, para asegurar concesiones petroleras en otros países como Sudán.

La llegada del régimen de Omar al Bashir impuso, ante una situación de aislamiento severo, una serie de reformas económicas estructurales. Sin embargo, a pesar de la importancia que estos cambios han tenido en el escenario económico de Sudán, los vínculos tanto políticos como económicos del régimen continuaron siendo muy limitados e inconstantes.

Vinculación con el genocidio

De acuerdo con el razonamiento de Harff, mientras mayor es el grado en que un país es interdependiente de otros, menos propensos son sus líderes a intentar genocidios o *politicidios*. Esta idea, a su vez, deriva en la afirmación de que los líderes de Estados aislados son más propensos a calcular que pueden eliminar grupos no deseados sin repercusiones internacionales. Esta interdependencia cuenta con dos dimensiones, una económica y una política.

En el ámbito económico es cierto que el régimen actual llevó a cabo ambiciosas políticas de liberalización económica y vinculación con organismos financieros internacionales, enfocándose principalmente en el desarrollo de su industria petrolera y su relación estratégica con China, cuyo gobierno fungió como su principal aliado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU).

A pesar de la magnitud y el impacto de estas políticas económicas, el grado de interdependencia económica de Sudán siguió siendo pobre, como consecuencia de la inestabilidad generada por sus constantes guerras civiles y las agresivas campañas impulsadas por la ideología islamista y arabista del régimen. Sin embargo, su vínculo comercial de carácter estratégico con China impidió la generación de un consenso al interior del CSNU que derivara en acciones que incidieran directamente en la prevención y la sanción de las atrocidades cometidas durante el genocidio de Darfur.

En la dimensión política, la relación de cooperación con el gobierno de los Estados Unidos en materia de inteligencia, desarrollada en el marco de la lucha contra el terrorismo, aunada a las restricciones que enfrentó la administración de Bush en el ámbito político tanto interno como internacional y a su interés en la firma del Acuerdo Integral de Paz que puso fin a la guerra civil sudanesa, evitó que, a pesar de las constantes y categóricas acusaciones de genocidio en contra del régimen de Omar al Bashir, este miembro permanente del CSNU tomara medidas congruentes con respecto a su postura retórica, con miras a la emisión de resoluciones oportunas y efectivas para la prevención y la sanción de este genocidio.

En relación con este factor causal puede afirmarse que el genocidio de Darfur fue llevado a cabo en un contexto en el que el gobierno de Sudán se encontraba en la etapa final

de un aislamiento político severo, consecuencia de las sanciones impuestas por la comunidad internacional tras su participación en actividades de “terrorismo” internacional, al mismo tiempo en que su proceso de apertura comercial apenas comenzaba a materializarse.

Esta marginalidad económica y política relativa hacia la mayor parte de la comunidad internacional, aunada a la confianza otorgada por sus vínculos estratégicos con estos dos miembros permanentes del CSNU, permitieron al gobierno de Sudán calcular que podría llevar a cabo una campaña genocida sin penalizaciones internacionales severas, además de perpetuar y agudizar las condiciones que convirtieron dicha campaña en la crisis humanitaria más grave de su tiempo.

El caso de Sudán muestra claramente la forma en que ambas dimensiones de la interdependencia se vinculan e inciden en la ocurrencia de genocidios, en un contexto posterior a la Guerra Fría, donde, como Harff señala, las respuestas internacionales se han vuelto más inmediatas y contundentes como consecuencia de la presencia y la participación cada vez más frecuente de organizaciones internacionales encargadas de la prevención y el castigo de atrocidades masivas. Sin embargo, a pesar de este avance, la voluntad de los miembros permanentes del CSNU, consecuencia de sus intereses económicos y políticos, sigue siendo el principal determinante del éxito o el fracaso de tales organismos.

Conclusión

Durante la guerra de Darfur ocurrió un genocidio. La presencia de un genocidio o un *politicidio* fue demostrada por la promoción, ejecución y consentimiento por parte gobierno de Sudán y las milicias *janjawid*, de políticas previstas para destruir, total o parcialmente, a los grupos étnicos *fur*, *masalit* y *zaghawa*, principalmente, a quienes politizaron al definirlos como sus enemigos fácticos o potenciales.

Por otra parte, la alta agitación política representada por ambas guerras civiles en Sudán y Darfur, los dos genocidios anteriores durante la primera y segunda guerras civiles sudanesas, la ideología islamista y arabocéntrica de la élite gobernante, el régimen autocrático de Omar al Bashir, el dominio del gobierno por una élite compuesta por miembros de tres tribus que representan una minoría étnica y la baja apertura comercial de Sudán fueron factores causales del genocidio ocurrido en Darfur.

Este artículo busca contribuir a la idea de que la revisión histórica de los antecedentes y el análisis teórico de los factores que pueden explicar la ocurrencia de genocidios o *politicidios* ofrecen la oportunidad de comprender más integralmente el complejo entramado de procesos que, al interactuar en configuraciones diversas, desembocan en estos fenómenos. Por otra parte, enfoques como este pueden ayudar también a esclarecer los posibles caminos que tanto los Estados como las organizaciones deben explorar en sus esfuerzos por prevenir estas y otras atrocidades masivas.

Referencias bibliográficas

- Deng, Francis Mading, (1995) *War of Visions: Conflict of Identities in the Sudan*. Washington, Brookings Institution Press.
- Flint, Julie y Alex De Waal, (2008) *Darfur: A New History of a Long War*. Londres, Zed Books.
- Hagan, John y Wenona Rymond-Richmond, (2009) *Darfur and the Crime of Genocide*. Nueva York, Cambridge University Press.
- Harff, Barbara, (2003) “No Lessons Learned from the Holocaust? Assessing Risks of Genocide and Political Mass Murder since 1955” en *American Political Science Review*. Vol. 97, núm. 1, pp. 57-73. Denton, University of North Texas. Disponible en: <https://www.jstor.org/stable/3118221?seq=1#page_scan_tab_contents> [Consultado el 15 de junio de 2016].
- I.D.F. y Munzoul Assal, (2010) “The National Congress Party and the Darfurian Armed Groups” en Black, David y Paul D. Williams (eds.), *The International Politics of Mass Atrocities: The Case of Darfur*. Nueva York, Routledge.
- O’Fahey, R. S., (2006) “Conflict in Darfur: Historical and Contemporary Perspectives” en Saeed, Bakri Osman (coord.), *Environmental Degradation as a Cause of Conflict in Darfur*. Adís Abeba, University for Peace, Africa Programme, pp. 23-32.
- Sidahmed, Abdel Salam y Alsir Sidahmed, (2005) *Sudan*. Londres, Routledge Curzon.
- Taylor, Aaron, (2010) “The People’s Republic of China” en Black, David y Paul Williams (eds.), *The International Politics of Mass Atrocities: The case of Darfur*. Nueva York, Routledge.

